

JULIO-DICIEMBRE

2025

AÑO LII

Nº 121

ISSN 0303-1829

NOTAS DE

Población

Desigualdad económica y pobreza en las personas mayores del Estado Plurinacional de Bolivia: efectos de la seguridad social según condición étnica (2000-2021)

Vladimir Pinto Saravia

Fecha de publicación: 28/11/2025

Publicación de las Naciones Unidas
LC/PUB.2025/15-P
Copyright © Naciones Unidas, 2025
Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago
S.2500299[S]

Las Naciones Unidas y los países que representan no son responsables por el contenido de vínculos a sitios web externos incluidos en esta publicación.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización o las de los países que representan.

Esta publicación debe citarse como: Pinto Saravia, V. (2025). Desigualdad económica y pobreza en las personas mayores del Estado Plurinacional de Bolivia: efectos de la seguridad social según condición étnica (2000-2021). *Notas de Población* (121) (LC/PUB.2025/15-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.



NACIONES UNIDAS



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL

Desigualdad económica y pobreza en las personas mayores del Estado Plurinacional de Bolivia: efectos de la seguridad social según condición étnica (2000-2021)

Vladimir Pinto Saravia¹

Recibido: 19/03/2025
Aceptado: 04/06/2025

Resumen

En este estudio se analiza el impacto de la seguridad social en la pobreza y la desigualdad de la población mayor boliviana (2000-2021), considerando la etnicidad, mediante índices de Gini, curvas de Lorenz y regresiones logísticas con datos de encuestas de hogares. Se observa una reducción en la desigualdad de ingresos en personas de 60 años y más, con disminución de la brecha del índice de Gini entre indígenas y no indígenas. La Renta Dignidad redujo más la pobreza en la población no indígena. El acceso a la seguridad social disminuyó el riesgo de pobreza entre la población indígena, en la que la educación también tuvo mayor impacto. Los programas combinados son esenciales para mejorar la calidad de vida, aunque el efecto reductor de pobreza de la jubilación y los seguros de salud disminuyó entre 2000 y 2021. Las diferencias étnicas observadas en el impacto de la seguridad social subrayan la necesidad de políticas inclusivas y multisectoriales.

Palabras clave: Envejecimiento de la población, personas mayores, Pueblos Indígenas, condiciones sociales, pobreza, mitigación de la pobreza, ingresos, distribución del ingreso, seguridad social, política social, Estado benefactor, Bolivia (Estado Plurinacional de).

¹ Licenciado en administración de empresas por la Universidad Loyola. Egresado del doctorado en estudios de población por El Colegio de México, Magíster en población y desarrollo del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) (Estado Plurinacional de Bolivia). Correo electrónico: vpinto@ipopulations.com.

Abstract

This study analyses the impact of social security on poverty and inequality among older persons in the Plurinational State of Bolivia (2000–2021), taking into account ethnicity, Gini indices, Lorenz curves and logistic regressions using household survey data. Income inequality among people aged 60 and over decreased, with a narrowing of the Gini index gap between Indigenous and non-Indigenous populations. The *Renta Dignidad* programme led to a greater decline in poverty among the non-Indigenous population. Access to social security reduced the risk of poverty among the Indigenous population, and education also had a greater impact on this group. Combined programmes are key to improving quality of life, although the poverty-reducing effect of pensions and health insurance weakened between 2000 and 2021. The differences found in the impact of social security across ethnic groups highlight the need for inclusive, multisectoral policies.

Keywords: Ageing persons, demographic ageing, indigenous peoples, social conditions, poverty, poverty mitigation, income, income distribution, social security, social policy, welfare state, Bolivia (Plurinational State of).

Introducción

En 2017, el 45% de la población mundial tenía acceso a algún beneficio de protección social, y solo el 29% contaba con sistemas integrales de seguridad social (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2018). En América Latina y el Caribe, estas políticas buscan garantizar ingresos para las personas mayores, desempleadas, con discapacidad y enfermas (Rofman, 2020). Sin embargo, la pobreza en la vejez sigue siendo un problema significativo. Las pensiones mínimas universales pueden reducirla, pero su impacto suele ser limitado debido a que no bastan para superar el umbral de pobreza y a que pueden conllevar altos costos fiscales de implementación, que dependen de factores como la edad de elegibilidad, la longevidad y la capacidad fiscal del país (Dethier et al., 2010).

En América Latina y el Caribe, el envejecimiento poblacional y el desempleo han impulsado un aumento del gasto social. Sin embargo, la influencia de instituciones financieras internacionales ha condicionado este aumento, promoviendo una reorientación del gasto; se ha tendido a restringir la inversión en bienestar y seguridad social, mientras que se ha priorizado el gasto en salud (Noy, 2011). Entre 2003 y 2008, varios países latinoamericanos fortalecieron sus políticas laborales, promoviendo el empleo formal, las mejoras salariales y la mayor cobertura de seguridad social, lo que contribuyó a reducir la pobreza y la desigualdad (Bertranou y Maurizio, 2011).

Los debates sobre seguridad social y pobreza en la vejez se centran en la sostenibilidad financiera ante el envejecimiento poblacional y una base laboral reducida, así como en la adecuación de las prestaciones para equilibrar beneficios dignos con costos asumibles. El tema de la edad de jubilación genera tensiones relacionadas con garantizar la viabilidad del sistema, al tiempo que se consideran las limitaciones laborales de las personas mayores y el impacto en el empleo juvenil. Además, persiste una brecha de género, ya que las mujeres reciben pensiones menores debido a las interrupciones laborales ligadas a las labores de cuidado no remuneradas. En América Latina y el Caribe, los desafíos incluyen la baja cobertura, ya que un tercio de los trabajadores urbanos carece de acceso a sistemas formales de seguridad social (OIT, 2014), y la necesidad de ampliar la protección a los jóvenes y las mujeres para reducir las desigualdades (Bárcena, 2011; OIT, 2014). Además, se propone integrar la cobertura de seguridad social al trabajo formal e informal mediante enfoques adaptados a distintas etapas vitales (Bárcena, 2011), mientras se debate el papel del ahorro personal, que exige educación financiera y capacidad de ahorro. Frente a una población mayor dependiente y menos trabajadores activos, se requieren reformas estructurales para equilibrar la inclusión, la equidad y la sostenibilidad financiera, y asegurar que la seguridad social continúe siendo un pilar clave en la reducción de la pobreza y la estabilidad económica (Mesa-Lago, 1991). En resumen, los desafíos de las pensiones son la cobertura, el grado de suficiencia y la sostenibilidad.

Este estudio examina cómo una serie de variables de la seguridad social (jubilación, acceso a salud y rentas (transferencias públicas no contributivas) de personas mayores) han afectado a la pobreza y la desigualdad en la población mayor boliviana entre 2000 y 2021, considerando la condición étnica. Se busca contribuir al debate sobre la importancia de la seguridad social y destacar la necesidad de políticas inclusivas que aborden la pobreza y la desigualdad de manera efectiva.

A. Antecedentes

1. Conceptualización de la seguridad social y el Estado de bienestar

a) Estado de bienestar

La seguridad social es un pilar fundamental del Estado de bienestar, cuyo propósito es garantizar la protección económica y social en distintas etapas de la vida. Así, a través de la redistribución de recursos y la provisión de servicios esenciales, como salud, educación y pensiones, se busca reducir la vulnerabilidad económica, entendida como la exposición a riesgos que afectan negativamente el bienestar material de los hogares, como el desempleo o la falta de protección social, y mejorar la calidad de vida de la población, aludiendo al acceso efectivo a condiciones dignas de salud, ingresos, vivienda y seguridad, que se consideran pilares del bienestar en las sociedades contemporáneas (Enciclopedia Británica, 2023; Kenton, 2022). Asimismo, se basa en principios de igualdad de oportunidades y equidad en la distribución de la riqueza, y se financia mediante impuestos progresivos y contribuciones sociales. Existen distintos modelos de Estado de bienestar: el liberal, con baja intervención estatal (Estados Unidos o Reino Unido); el conservador, basado en contribuciones laborales (Alemania y Francia); y el socialdemócrata, que garantiza la protección universal (países escandinavos) (Esping-Andersen, 1990).

Si bien el Estado de bienestar ha reducido la pobreza y desigualdad, enfrenta desafíos, como su sostenibilidad financiera y el riesgo de generar dependencia del Estado (Muñoz De Bustillo, 2021). Su viabilidad varía según la estructura económica y política de cada país, y en muchos casos requiere reformas para mantener su eficacia. La creciente desigualdad económica puede afectar la aplicación de políticas redistributivas, reducir el apoyo a estas medidas y limitar la inclusión de sectores vulnerables (Esping-Andersen y Myles, 2009). Para garantizar su sostenibilidad, es fundamental diseñar políticas que busquen el equilibrio entre la eficiencia y la equidad, y promuevan un modelo de bienestar que proteja a las generaciones actuales y futuras.

b) Seguridad social

La seguridad social es clave para la estabilidad económica y social, y protege contra contingencias como el desempleo y la enfermedad y la pérdida de ingresos en la vejez. Si bien el envejecimiento no constituye un riesgo en sí mismo, puede generar desafíos para la

sostenibilidad del sistema cuando no existen mecanismos adecuados de protección, especialmente en contextos de informalidad y desigualdad (Aranco et al., 2022; Dahuabe, 2023; OIT, 2001). En América Latina, los países han adoptado distintos modelos: la Argentina combina un sistema de reparto con capitalización individual (Aranco et al., 2022); el Brasil gestiona un sistema de reparto junto con el programa Bolsa Família (Prado y Sojo, 2010); Chile opera con un sistema de capitalización individual con apoyo de la Pensión Básica Solidaria (Álvarez et al., 2020), y México ofrece una pensión no contributiva para personas mayores en situación de pobreza (OIT, 2021). Sin embargo, el envejecimiento poblacional y la informalidad laboral limitan la cobertura y ponen en peligro la viabilidad financiera de los sistemas de reparto. Además, las pensiones suelen ser insuficientes y persiste la desigualdad de género, ya que las mujeres reciben menores beneficios debido a las interrupciones laborales. Para enfrentar estos desafíos, es preciso fortalecer la cobertura, mejorar la sostenibilidad financiera y reducir las brechas de equidad en la seguridad social (Álvarez et al., 2020; Martínez e Infante, 2019).

2. Pobreza y desigualdad en la vejez desde la perspectiva de la seguridad social

El envejecimiento poblacional en América Latina ha expuesto a millones de personas mayores a condiciones de precariedad, debido a la baja cobertura de los sistemas previsionales contributivos y a la alta informalidad laboral. Esto ha estrechado la relación entre pobreza y seguridad social, reforzando la necesidad de pensiones no contributivas para mitigar la vulnerabilidad en la vejez (Belmont, 2021; Oliveri, 2016). La falta de protección social adecuada expone a este grupo a mayores niveles de pobreza, ya que el acceso a las pensiones y los servicios de salud no solo mejora su bienestar, sino que reduce el riesgo de caer en la pobreza como consecuencia de gastos médicos elevados (Aranco et al., 2022; Salgado-de Snyder y Wong, 2007). Actualmente, el 34,5% de los mayores de 65 años en la región no cuenta con ningún ingreso, y cerca de la mitad de la población laboralmente activa no tiene cobertura previsional debido a la informalidad (OIT, 2022; Oliveri, 2016).

La pobreza en la vejez en América Latina responde a factores económicos, sociales y políticos, como la baja cobertura de los sistemas de pensiones, la desigualdad estructural y la informalidad laboral (Banco de Desarrollo de América Latina [CAF], 2022; Esteve y Zueras, 2021). La falta de acceso a pensiones contributivas y no contributivas deja a muchas personas mayores sin ingresos, obligándolas a depender de sus familias, que en muchos casos también enfrentan dificultades económicas (CAF, 2020; OIT, 2022). Además, problemas como los bajos salarios, la discriminación de género y étnico-racial, la falta de acceso a servicios financieros y la corrupción en la administración de los sistemas de pensiones agravan la situación (Arenas de Mesa, 2020; De Ferranti et al., 2002; Díaz Espaillat, 2022). Estos desafíos evidencian la necesidad de reformas estructurales que garanticen la seguridad económica y social de las personas mayores en la región.

3. Modelos de seguridad social

a) El modelo Bismarck alemán y el Beveridge británico

Los modelos de seguridad social Bismarck y Beveridge representan dos enfoques fundamentales en la provisión de bienestar. El modelo Bismarck, implementado en Alemania en 1883, se basa en un sistema contributivo donde los trabajadores y empleadores financian los seguros de salud, accidentes y pensiones. Sus ventajas incluyen la cobertura obligatoria, la corresponsabilidad financiera y la proporcionalidad en las prestaciones, pero enfrenta desafíos como la exclusión de trabajadores informales y la dependencia de las contribuciones laborales (Berra, 2000; Sanchez-Castañeda, 2012). Se divide en conservador clásico (Alemania y Francia), conservador-liberal (Suiza y Países Bajos (Reino de los)) y radical (países nórdicos). El modelo Beveridge, surgido en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, promueve la universalidad de la seguridad social con financiamiento estatal mediante impuestos. Destaca por su cobertura total, integración de servicios y adaptabilidad, aunque enfrenta desafíos como altos costos fiscales y falta de incentivos a la contribución individual (Sanchez-Castañeda, 2012). Sus variantes incluyen el régimen liberal clásico (Estados Unidos y Canadá), socialdemócrata (Suecia y Noruega) y mediterráneo conservador (España e Italia).

b) Modelos de seguridad social en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, los modelos de seguridad social varían y combinan políticas gubernamentales con condiciones socioeconómicas. Existen tres enfoques principales: el modelo contributivo, donde los empleadores y empleados financian beneficios como las pensiones y la atención médica; el modelo proteccionista, en el que el Estado ofrece un seguro social básico para todos los ciudadanos; y el modelo mixto, que combina ambos tipos. Estos sistemas han evolucionado con reformas que integran los sectores público y privado, lo que ha permitido ampliar la cobertura contributiva y no contributiva, especialmente en la década previa a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) (Cetrángolo, 2009; Minoldo y Peláez, 2023; OIT, 2021).

A pesar de los avances, persisten desafíos significativos para extender la seguridad social a toda la población. Los sistemas de pensiones enfrentan riesgos como la mala gestión, el fraude, la inestabilidad macroeconómica y los cambios demográficos, lo que pone en peligro su sostenibilidad a largo plazo. Además, la incertidumbre política y económica continúa afectando la capacidad de los países para garantizar pensiones adecuadas y el acceso equitativo a la protección social (Gill et al., 2005; Murro, 2004).

4. Contexto internacional

La seguridad social es fundamental para reducir la pobreza en la vejez. Un estudio de Meyer y Wu (2018) mostró que, en los Estados Unidos, sin estos ingresos, dos tercios de las personas mayores se considerarían pobres, y en 2008 la tasa de pobreza en este grupo se

redujo al 16% gracias a este programa. En América Latina y el Caribe, las personas mayores enfrentan vulnerabilidad económica y problemas de salud crónicos, y aunque las pensiones no contributivas y el acceso a servicios de salud han reducido la pobreza en algunos países, persisten desigualdades en los sistemas de pensiones (Aranco et al., 2022). En los Estados Unidos, la expansión de la seguridad social entre 1885 y 1930 fue clave en la mejora de las condiciones económicas de las personas mayores, con una reducción acelerada de la pobreza en las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, desde los años ochenta, la desaceleración del crecimiento del programa ralentizó estos avances, lo que destaca la importancia de mantener y fortalecer la seguridad social para evitar retrocesos (Engelhardt y Gruber, 2004).

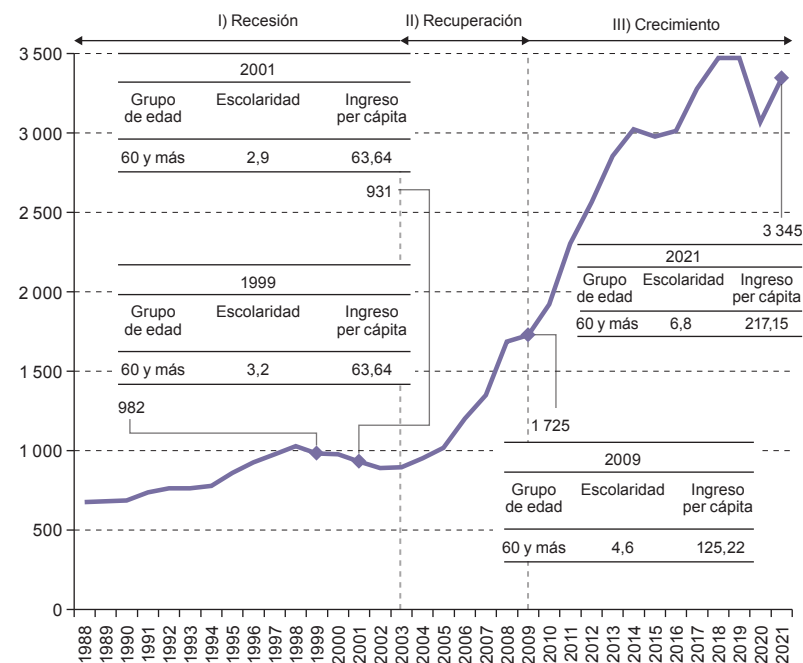
La estructura del hogar influye en la seguridad económica de las personas mayores, ya que determina el acceso a recursos y servicios. Según la División Observatorio Social (2020), en Chile los hogares con personas mayores presentan menores tasas de pobreza, aunque las mujeres asumen la mayor carga de cuidado y apoyo financiero en las familias (Astorquiza Bustos y Armando Chingal, 2019). Los hogares multigeneracionales ofrecen una red de apoyo más amplia, lo que favorece el bienestar emocional y social de las personas mayores, mientras que aquellas con menos recursos enfrentan dificultades en materia de salud, alimentación y cuidados (Esteve y Zueras, 2021). Además, el parentesco influye en la distribución de recursos y la carga del cuidado, lo que afecta la calidad de vida de las personas mayores y su estabilidad económica (Roldán Ramírez et al., 2023; Sánchez Galvis y Ceballos Zuluaga, 2021). Esto subraya la importancia de fortalecer los sistemas de protección social para reducir la dependencia familiar y garantizar condiciones dignas para la vejez.

5. Contexto en el Estado Plurinacional de Bolivia

Las personas de 60 años y más en el Estado Plurinacional de Bolivia han pasado de representar el 6,4% de la población en 1976 al 10% en 2023. Esto refleja un proceso de envejecimiento gradual pero sostenido. Este cambio plantea desafíos para la sostenibilidad del sistema de protección social. Las mujeres representan el 53,4% de este grupo, y alrededor del 40% se identifica como indígena, mayoritariamente en zonas rurales, lo que refuerza la necesidad de analizar la pobreza y desigualdad desde un enfoque interseccional (Fundación Aru y Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2024; Instituto Nacional de Estadística [INE], 2019).

Entre 1999 y 2021 (véase el gráfico 1), el Estado Plurinacional de Bolivia atravesó tres etapas económicas: una recesión en los años noventa derivada de la liberalización económica y la erradicación de cultivos; una recuperación moderada (2003-2009) gracias al alza de los minerales y las nacionalizaciones, y un crecimiento sostenido desde 2009 impulsado por el auge del gas. Este contexto permitió expandir el gasto social e implementar programas, como la Renta Dignidad, que redujeron la pobreza entre las personas mayores, pese a que seguía habiendo desafíos, como la informalidad laboral, las desigualdades étnicas y la baja cobertura previsional (Cachaga Herrera, 2019; Gómez et al., 2015; Muriel y Jemio, 2010).

Gráfico 1
Estado Plurinacional de Bolivia: PIB per cápita a precios de mercado, 1988-2021
 (En dólares)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Banco Mundial (<https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BO>).

La seguridad social en el Estado Plurinacional de Bolivia ofrece una cobertura amplia para las personas mayores gracias a la Renta Dignidad, que alcanza incluso a quienes no reciben pensiones contributivas. Sin embargo, esto no representa un esfuerzo fiscal elevado, ya que el gasto en pensiones es solo el 1,1% del PIB, muy inferior al de la Argentina (9%) y el Brasil (9,6%) (Arenas de Mesa, 2020). La Renta Dignidad, que se implementó en 2007, otorga anualmente entre 3.900 bolivianos (sin jubilación contributiva) y 3.250 bolivianos (con jubilación contributiva). Estos montos aumentaron progresivamente hasta alcanzar los 4.550 bolivianos en valores recientes. Esta transferencia monetaria ha contribuido significativamente a reducir la pobreza y a mantener la estabilidad económica, particularmente durante la pandemia (Asociación Internacional de la Seguridad Social [AISS], 2021; Santos et al., 2023).

Entre 1980 y 2016, el Estado Plurinacional de Bolivia implementó una serie de programas sociales, como el Bono Juancito Pinto para incentivar la educación, la Renta Dignidad para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, o el Bono Juana Azurduy para la salud maternoinfantil. Aunque estas iniciativas redujeron la pobreza extrema en un 1,8%, persisten desigualdades sociales (Ramos Menar et al., 2017). La Ley N° 065 de 2010 y la Ley General de las Personas Adultas Mayores (Ley N° 369) de 2013 establecen derechos, garantías y prestaciones del sistema previsional (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013).

El Estado Plurinacional de Bolivia ha transitado de un sistema de reparto a otro de capitalización individual administrado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), complementado con programas no contributivos, como el Bonosol y la Renta Dignidad, esta última de cobertura universal para personas de 60 años y más. Esta combinación busca ampliar la cobertura en un contexto de alta informalidad y envejecimiento. Actualmente, cerca del 70% de las personas mayores accede a alguna pensión, lo que refleja un modelo mixto orientado por principios de universalidad, equidad y solidaridad (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2021). Las AFP han sido objeto de críticas por su baja rentabilidad y su impacto limitado en términos de seguridad social (Bonadona Cossío, 2003).

B. Datos y métodos

1. Datos

Este capítulo se ha elaborado con datos de las Encuestas de Hogares de 2000 a 2021, recolectadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que tienen una muestra “probabilística, por conglomerados, estratificada y bietápica, representativa a nivel nacional, urbana y rural. Las unidades básicas de la investigación son los hogares particulares ocupados. La recogida de datos se las realiza entre los meses de noviembre y diciembre de cada año” (Pinto Saravia y Salinas-Castro, 2023, p. 38).

a) Variable dependiente

La pobreza puede interpretarse desde distintas perspectivas, como las condiciones materiales, económicas y sociales (Spicker, 2009). En América Latina y el Caribe, la modalidad más difundida es la de las necesidades básicas insatisfechas (Feres y Mancero, 2001) y se mide con metodologías como la de Foster, Greer y Thorbecke (1984), que asigna mayor peso a quienes están más alejados de la línea de pobreza. En el Estado Plurinacional de Bolivia, se emplea el método de líneas de pobreza, y se considera un nivel de vida adecuado, entendido como la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas mediante el consumo de bienes y servicios esenciales, mientras que la pobreza extrema se define por un ingreso per cápita inferior al costo de una canasta básica alimentaria (INE, 2020). Inicialmente, se analizaron las variables de pobreza moderada y extrema, pero, al desagregar los modelos por condición étnica, la cantidad de casos en algunos subgrupos se redujo significativamente, lo que afectó la robustez de los coeficientes estimados y la estabilidad de los modelos. Por esta razón, se optó por una variable dicotómica de pobreza (0 = no pobre, 1 = pobre), calculada en cada encuesta. El ingreso se mide como la relación entre el ingreso mensual total del hogar y el número de miembros, excluidos empleados domésticos y sus familiares. Este ingreso incluye fuentes laborales y no laborales, como rentas sociales, transferencias y remesas, y, a fin de garantizar la comparabilidad en el tiempo, se expresa en dólares constantes de 2016.

b) Variables independientes

Para el análisis bivariado y del modelo, en una primera etapa se incluyeron variables explicativas, como jubilación, afiliación a seguro de salud privada, renta de personas mayores, condición laboral actual, estado de situación laboral, afiliación a un fondo de pensiones, logro educativo, composición del hogar y número de personas en el hogar. Después de analizar su representatividad en el modelo y el grado de explicación de la pobreza, se decidió utilizar las que explican mejor el modelaje, definidas más adelante².

i) Jubilación

Examina el acceso a la prestación social por jubilación que se percibe de manera regular sin incluir acceso a la renta de personas mayores (Renta Dignidad). Esta variable está codificada como: Tiene jubilación = 1, Sin jubilación = 0.

ii) Acceso a seguro de salud

Registra la afiliación de las personas a algún seguro de salud, sea público, privado u otro. Esta variable se codifica como: Ninguna = 0, Público = 1 y Privado = 2.

iii) Renta de personas mayores

Registra las personas mayores que perciben la renta universal de personas mayores (Renta Dignidad). Se la codifica: Percibe renta = 1, No percibe renta = 0.

iv) Logro educativo

Se refiere a los años de estudio alcanzados que, a efectos de este análisis, se categorizarán de la manera indicada en el cuadro 1. Se utiliza la variable calculada de los años de estudio de la población.

Cuadro 1

Estado Plurinacional de Bolivia: categorías educativas según años de estudio

Categoría	Años de educación
Ninguna	0
Primaria	1-6
Secundaria	7-12
Superior	13-22

Fuente: Ministerio de Educación. (2010). *Ley de la educación No. 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez"*. Asamblea Legislativa Plurinacional. https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=3554&Itemid=470 y Crystal, S., Shea, D. y Krishnaswami, S. (1992). Educational attainment, occupational history, and stratification: Determinants of later-life economic outcomes. *Journal of Gerontology*, 47(5), S213-S221. <https://doi.org/10.1093/geronj/47.5.S213>.

² Aunque la condición laboral actual es un determinante importante del bienestar económico en la vejez, en este estudio no resultó significativa en los modelos multivariantes. Esta variable se incluyó inicialmente, pero su efecto se vio parcialmente absorbido por otras covariables, como la jubilación y la percepción de renta no contributiva. Además, las pruebas de colinealidad y estimaciones por subgrupos mostraron una reducción en la potencia estadística y la estabilidad de los modelos al mantenerla. Por ello, se optó por excluirla del modelo final, aunque se reconoce su importancia en contextos de informalidad persistente y baja cobertura previsional.

v) Condición étnica

Diversos estudios muestran desigualdades por condición étnica en distintos contextos. En el Brasil, por ejemplo, se observa la persistencia de la desigualdad étnico-racial en la distribución de recursos (Burgard, 2002) y, aunque el vínculo entre la condición étnico-racial y la educación ha cambiado, reduciéndose algunas brechas educativas, la condición étnica continúa siendo un factor determinante de desigualdad económica a lo largo del ciclo de vida, especialmente en los logros educativos (Marteleto, 2012; Cheng et al., 2019). Asimismo, la condición étnico-racial influye en la dificultad de acceder a créditos por la falta de bienes, lo que reproduce desventajas económicas (Killewald, 2013). En términos de género, se ha documentado que las mujeres afrodescendientes alcanzan mayores niveles educativos en comparación con los hombres afrodescendientes (McDaniel et al., 2011), aunque la intersección entre condición étnica-racial y género genera una desventaja acumulativa para los grupos minoritarios, particularmente en América Latina (Taş et al., 2014). Finalmente, se destaca que las mujeres afrodescendientes son especialmente vulnerables a la inseguridad económica y a la pobreza en la jubilación (Sullivan y Meschede, 2016).

El convenio de la OIT (1989) establece cuatro dimensiones en la definición de Pueblo Indígena: i) reconocimiento a la identidad; ii) origen común; iii) territorialidad, y iv) lingüística-cultural (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2007; Del Popolo y Schkolnik, 2013; Schkolnik y Del Popolo, 2005).

Como se puede ver, no es fácil determinar la población indígena, ya que existen diversas definiciones y se debería abordar desde una perspectiva multidimensional.

En ese sentido, la construcción de esta variable rescata los estudios realizados por Molina, Albó, y Figueroa (2006), quienes proponen el índice de condición étnica lingüística (CEL), que incorpora dos dimensiones: autopertenencia y lingüística³, para medir de manera ordinal la ubicación en la que se encuentra cada persona, teniendo en un extremo la condición étnica plena (aymara, quechua, entre otros), y en el otro extremo, la condición nula. Este índice se construye a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Qué idiomas o lenguas habla?⁴
- ¿Cuál es el idioma o lengua en que aprendió a hablar en la niñez?⁵
- ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas?⁶

Como resultado de estas preguntas, se observan ocho combinaciones posibles que determinan si se considera a las personas con condición étnica no indígena (que contempla la condición nula), y personas indígenas (que contempla la condición lingüística, corte por pertenencia y plena condición étnica), tal como se ve en el cuadro 2.

³ A los menores de 5 años, se les asigna la pertenencia étnica del jefe de hogar.

⁴ No se incluye a las personas que aún no hablan o que no pueden hablar.

⁵ No incluye a las personas que aún no hablan o que no pueden hablar.

⁶ La formulación de esta pregunta ha cambiado. En 1999 se utilizó “¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos indígenas/originarios, o perteneciente a algún grupo minoritario?”. En 2019, la pregunta utilizada fue “Como boliviana o boliviano ¿A qué nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece?”.

Cuadro 2

Estado Plurinacional de Bolivia: combinaciones posibles según condición étnico-lingüística (CEL) por categorías de indígenas/no indígenas, 2020

Combinación	Condición étnico-lingüística			Población		Categoría indígena/no indígena	Condición étnica
	Pertenencia étnica	Idioma que habla	Lengua materna	2000	2021		
0	No	No	No	2 236 068	5 265 069	Condición étnica nula	No indígena
1	No	Sí (con castellano)	No	448 343	745 038		
2	No	Sí (con castellano)	Sí	254 795	651 339	Por condición lingüística	Indígena
3	No	Sí (sin castellano)	Sí	11 912	107 186		
4	Sí	No	No	406 429	489 906	Por pertenencia	
5	Sí	Sí (con castellano)	No	476 686	489 914	Plena condición étnica	
6	Sí	Sí (con castellano)	Sí	1 412 808	1 438 699		
7	Sí	Sí (sin castellano)	Sí	408 805	239 343		
Total				5 655 846	9 426 493		

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Molina B., R., Albó, X., y Figueroa, M. (2006). El índice combinado de condición étnico-lingüística (CEL) y su aplicación al Censo 2001 de Bolivia. En *Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: Información sociodemográfica para políticas y programas* (pp. 455–470). <https://doi.org/10.1080/02697459208722860>; Candia Calderón, G. A. (2018). *¿Bolivia cambia? Un análisis del “trabajo digno” y de las trayectorias laborales de la juventud boliviana, en el periodo 2007–2015* [Tesis de maestría, FLACSO México]. <https://flacso.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1026/194> e Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia, datos de la Encuesta de Hogares 2020. <https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-y-banco-de-datos/censos/bases-de-datos-encuestas-sociales/>.

Esta variable está categorizada como No indígena = 0 e Indígena = 1.

c) Variables de control

Se incluyen algunas variables de control demográfico, como género (codificado mujeres = 1 y hombres = 0) y zona de residencia (codificada zona rural = 1 y zona urbana = 0).

Se utilizan los años de las encuestas como una variable continua, con el año 2000 como año base equivalente a 0, hasta 2021 equivalente a 19.

En el cuadro 3 se resumen las variables utilizadas para el análisis y se indican las categorías de referencia del modelo estadístico usado.

Cuadro 3
Resumen de variables dependientes, independientes y de control

Variable	Tipo	Descripción	Categorías/Codificación
Situación de pobreza	Dependiente	Mide si la persona se encuentra por debajo de la línea de pobreza.	0 = No pobre ^a 1 = Pobre
Jubilación	Independiente	Indica si la persona recibe pensión de jubilación contributiva.	0 = No tiene jubilación 1 = Tiene jubilación ^a
Acceso a seguro de salud	Independiente	Afiliación a algún seguro público o privado de salud.	0 = Ninguno ^a 1 = Público 2 = Privado
Renta de personas mayores	Independiente	Percepción de transferencia no contributiva (Renta Dignidad).	0 = No percibe 1 = Percibe ^a
Logro educativo	Control	Nivel educativo alcanzado (años de estudio).	0 = Ninguno (0 años) 1 = Primaria (1-6) 2 = Secundaria (7-12) 3 = Superior (13-22) ^a
Condición étnica	Principal/eje	Identificación con pueblos indígenas, con base en pertenencia y lengua.	0 = No indígena ^a 1 = Indígena (por pertenencia, lengua o ambas, según índice CEL)
Sexo	Control	Sexo.	0 = Hombre ^a 1 = Mujer
Zona de residencia	Control	Ubicación del hogar.	0 = Urbana ^a 1 = Rural
Año de encuesta	Control	Año de referencia de la encuesta.	Variable continua: 2000 = 0, ..., 2021 = 19

Fuente: Elaboración propia.

^a Categorías de referencia.

d) Estrategia analítica

El análisis se centra en personas de 60 años y más⁷. Para medir la desigualdad de ingresos, se utilizan curvas de Lorenz (2001, 2011 y 2021) y el índice de Gini (2001-2021), ambos desagregados por condición étnica. También se calcula la incidencia de la pobreza por condición étnica. Se realiza un análisis descriptivo de la pobreza (2001, 2006, 2011, 2016 y 2021) en relación con la jubilación, la afiliación a seguro de salud y el acceso a renta de personas mayores. Para el análisis multivariado, se estiman modelos logit que incluyen como variables principales las dimensiones de seguridad social y, como controles, área geográfica, edad, nivel educativo, composición del hogar y año de encuesta, siguiendo a Goesling (2007) y Schoeni et al. (2005).

El modelo logit es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 & \text{logit} (Pobre_{it} | NoPobre_{it} \in \text{sexo}\{h,m\} \wedge \text{edad}\{60+\} \wedge \text{condetnic}\{\text{indig}, \text{no indig}\}) \\
 & = \beta_0 + \beta_1 \text{Jub}_{0it} + \beta_2 \text{Salud}_{0it} + \beta_3 \text{Salud}_{2it} + \beta_4 \text{renta}_{0it} + \beta_5 \text{educa}_{0it} + \beta_6 \text{educa}_{1it} \\
 & + \beta_7 \text{educa}_{2it} + \beta_8 \text{sexo}_{1it} + \beta_9 \text{area}_{1it} + \beta_{10} y_{it} + \beta_{11} [\text{Jub}_{0it} * y_{it}] + \beta_{12} [\text{Salud}_{0it} * y_{it}] \\
 & + \beta_{13} [\text{renta}_{0it} * y_{it}] + \beta_{14} [\text{educa}_{0it} * y_{it}] + \beta_{15} [\text{educa}_{1it} * y_{it}] + \beta_{16} [\text{educa}_{2it} * y_{it}] \\
 & + \beta_{17} [\text{sexo}_{1it} * y_{it}] + \beta_{18} [\text{area}_{1it} * y_{it}]
 \end{aligned} \quad (1)$$

⁷ (n₂₀₀₀ = 1,528; n₂₀₀₁ = 1,703; n₂₀₀₆ = 1,272; n₂₀₁₁ = 3,026; n₂₀₁₆ = 3,922 y n₂₀₂₁ = 4,658).

Donde:

$Pobre_{it}$ representa la probabilidad estimada de estar en situación de pobreza para el i -ésimo individuo en la encuesta del año t , para las personas de 60 años y más, sexo (hombre y mujer) y condición étnica (no indígena e indígena). El término β_1 representa la diferencia en la razón de probabilidades (*odds ratio*) estimada de estar en situación de pobreza entre las personas que no tienen acceso a jubilación $sinJub_0$, respecto aquellas que acceden a jubilación (la categoría de referencia). El término β_2 representa la diferencia en la razón de probabilidades estimada de estar en situación de pobreza entre las personas que no se encuentran afiliadas a ningún seguro de salud $Salud_0$, respecto aquellas que si están afiliadas a algún seguro de salud público (la categoría de referencia), al igual que β_3 , para las personas que se encuentran afiliadas a algún seguro privado $Salud_2$. También, el término β_4 para aquellas personas que no reciben la renta de personas mayores $renta_0$, con las personas que sí reciben la renta, como categoría de referencia. Asimismo, los términos $\beta_5, \beta_6, \beta_7$, para aquellas personas sin ninguna educación ($educa_1$), con educación primaria ($educa_2$) y secundaria ($educa_3$), respectivamente, teniendo en cuenta a las personas que tienen educación superior como categoría de referencia. El término β_8 representa la diferencia en la razón de probabilidades estimada de estar en situación de pobreza entre las mujeres $sexo_1$ respecto a los hombres. El término β_9 representa la diferencia en la razón de probabilidades de estar en condición de pobreza entre las personas que residen en áreas rurales $area_0$, respecto aquellas que residen en áreas urbanas (la categoría de referencia). y_{it} representa la variable continua del año de la encuesta, siendo 0 para la encuesta base (2000) a 19 para la encuesta de 2021.

El modelo incluye interacciones año \times variable para captar cómo varió el efecto de la seguridad social sobre la pobreza entre 2000 y 2021. Esta estrategia evita ajustar modelos separados por año, lo que habría limitado la comparabilidad y reducido la potencia estadística. Se toma el año 2000 como base ($y = 0$) y 2021 como año final ($y = 19$)⁸, representando los cambios en los coeficientes $\beta_1 \dots \beta_9$. Además, se estimaron modelos por separado según condición étnica (indígena y no indígena) para evitar interacciones triples (etnicidad \times año \times variable), de interpretación más compleja, y así facilitar la comparación entre grupos.

Respecto del cálculo de efectos en la regresión logística, se consideran *probabilidades* de la variable en el año base (2000), tomando en cuenta que:

$$OR_{2000} = e^{\beta_n} \quad (2)$$

A su vez, el cálculo para 2021 de la variación porcentual en la probabilidad de pobreza en comparación con el año base (2000), considera δ_i , que representa la variable consultada con su interacción con el tiempo t , que corresponde al número de años transcurridos desde el año base:

$$P_{2021} = (1 - (e^{\ln(OR_{2000}) + (\ln(\delta_i) \times 19)})) \times 100 \quad (3)$$

⁸ Tomar en cuenta que en los años 2003 y 2004 se realizó una encuesta consolidada, por lo que se considera $y = 3$ para 2003. En el año 2010 no se realizó el levantamiento de esta encuesta, por lo que $y = 9$ para 2011, y de ahí es continua hasta $y = 19$ para 2021.

Por su parte, el cambio porcentual acumulado en la probabilidad de pobreza (ΔP_t), medido sobre la brecha de probabilidades respecto al año base t_0 se define como:

$$\Delta P_t = \left[\frac{(e^{(\ln(OR_{2000}) + (\ln(\delta_i) \times 19))}) \times 100}{OR_{2000}} \right] - 100 \quad (4)$$

Esta formulación permite interpretar los coeficientes de interacción δ_i no solo en términos de direccionalidad, sino también como tasa media anual de variación del efecto de la variable consultada sobre la pobreza, capturando la dinámica temporal de las desigualdades.

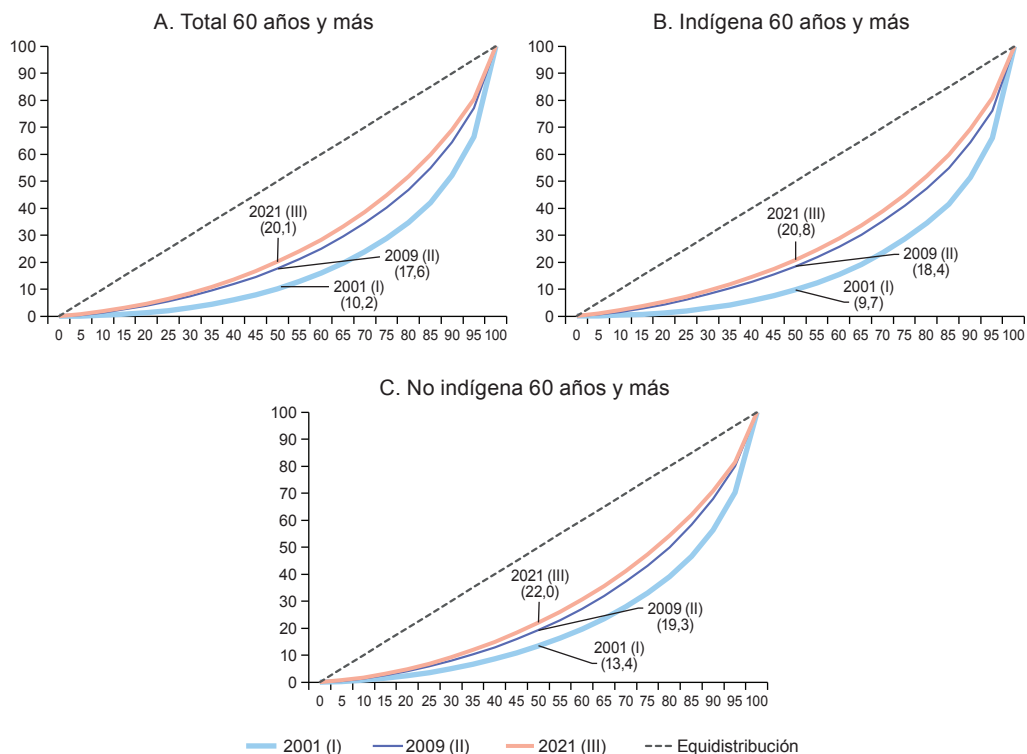
Finalmente, si bien se revisa la desigualdad de ingresos mediante el índice de Gini y curvas de Lorenz, el análisis estadístico se centra en modelar la situación de pobreza en personas mayores. El objetivo principal es estimar cómo variables de seguridad social, como jubilación, seguros de salud y transferencias no contributivas, inciden en la probabilidad de pobreza, considerando diferencias étnicas.

C. Resultados

1. Desigualdades de ingresos por condición étnica

Los resultados muestran que la seguridad social ha contribuido a reducir la pobreza entre las personas mayores en el Estado Plurinacional de Bolivia (2000-2021). Paralelamente, la desigualdad de ingresos disminuyó, aunque persisten brechas entre la población indígena y no indígena. Según las curvas de Lorenz (véase el gráfico 2.A), se identifican tres etapas económicas con trayectorias diferenciadas en la distribución del ingreso. Durante la etapa I (recesión económica, hasta 2003), la desigualdad era más marcada: en 2001, el 50% de la población con menores ingresos solo representaba el 10,2% del ingreso total. En la etapa II (recuperación económica, 2003-2009), este porcentaje aumentó al 17,6%, lo que refleja una mejora sustantiva en la redistribución. En la etapa III (crecimiento económico, 2009-2021), el valor se elevó al 20,1%, lo que muestra un avance sostenido, aunque todavía insuficiente. En el caso de las personas mayores indígenas (véase el gráfico 2.B), el 50% más pobre pasó de concentrar el 9,7% de los ingresos en 2001, al 18,4% en 2009 y el 20,8% en 2021. Entre las personas mayores no indígenas (véase el gráfico 2.C), este grupo pasó del 13,4% en 2001 al 19,3% en 2009 y el 22% en 2021. En conjunto, entre 2001 y 2021 la desigualdad de ingresos se redujo más entre las personas mayores indígenas (11,1 puntos porcentuales) que entre las no indígenas (8,6 puntos porcentuales), lo que sugiere un efecto positivo de las políticas sociales. No obstante, las brechas persisten y la desigualdad es ligeramente mayor entre las personas indígenas.

Gráfico 2
Estado Plurinacional de Bolivia: curvas de Lorenz de personas de 60 años y más, total y por condición étnica, 2001, 2009 y 2021
 (En porcentaje acumulado de los ingresos y de la población)



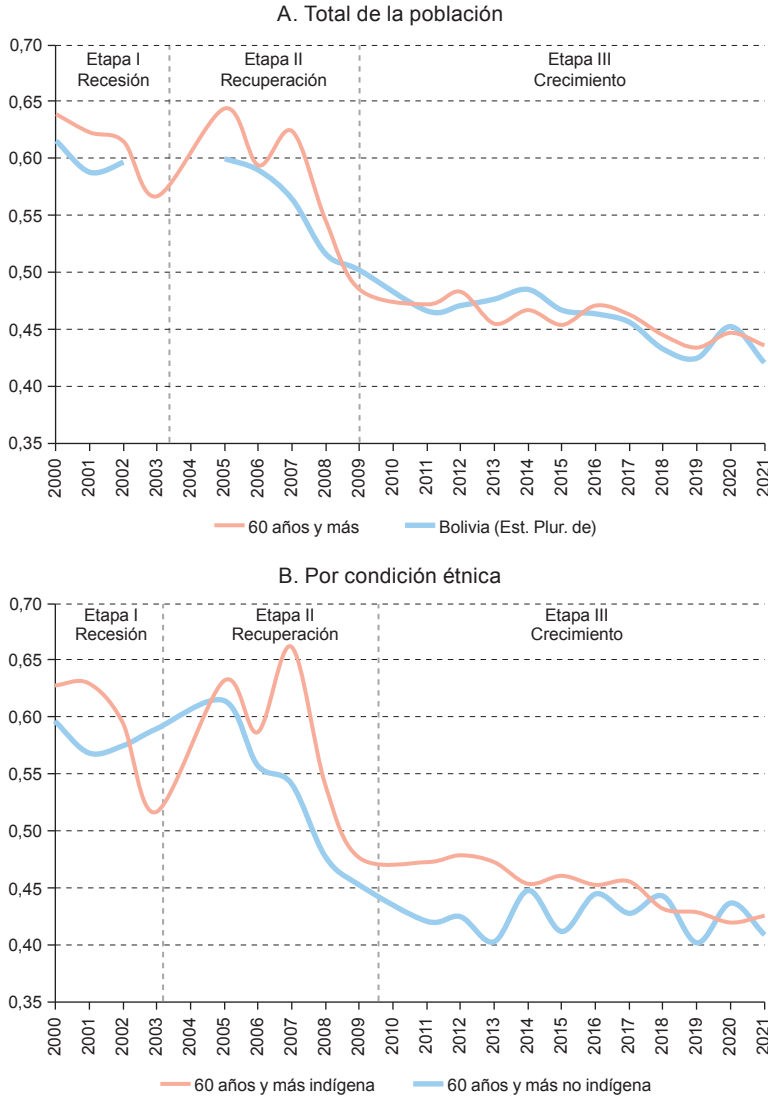
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia, Encuestas de Hogares, 2001, 2009 y 2021.

a) Índice de Gini

En consonancia con las curvas de Lorenz, el índice de Gini (véase el gráfico 3.A) muestra una tendencia sostenida a la reducción de la desigualdad de ingresos entre 2000 y 2021. En el total nacional, el Gini pasó de 0,616 en 2000 (etapa I) a 0,420 en 2021 (etapa III), mientras que entre las personas mayores fue de 0,639 a 0,436. En la mayoría de los años, la desigualdad fue mayor en este grupo, lo que sugiere una distribución del ingreso más regresiva entre las personas de 60 años y más. El impacto de la pandemia fue evidente en 2020, con un repunte del Gini que retrocedió a niveles de 2017.

Respecto a la condición étnica (véase el gráfico 3.B), entre personas mayores no indígenas la desigualdad se redujo de 0,597 en 2000 a 0,409 en 2021. Entre las personas indígenas, pasó de 0,628 a 0,426, aunque con una mayor volatilidad. En 2007 (etapa II), el Gini de personas mayores indígenas aumentó a 0,662, posiblemente por los efectos adversos de políticas mal dirigidas, mientras que en las personas no indígenas cayó a 0,542.

Gráfico 3
Estado Plurinacional de Bolivia: índice de Gini, personas de 60 años y más, total de la población y por condición étnica, 2000-2021



Fuente: Elaboración propia sobre la base del Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia, Encuestas de Hogares, 2000-2021.

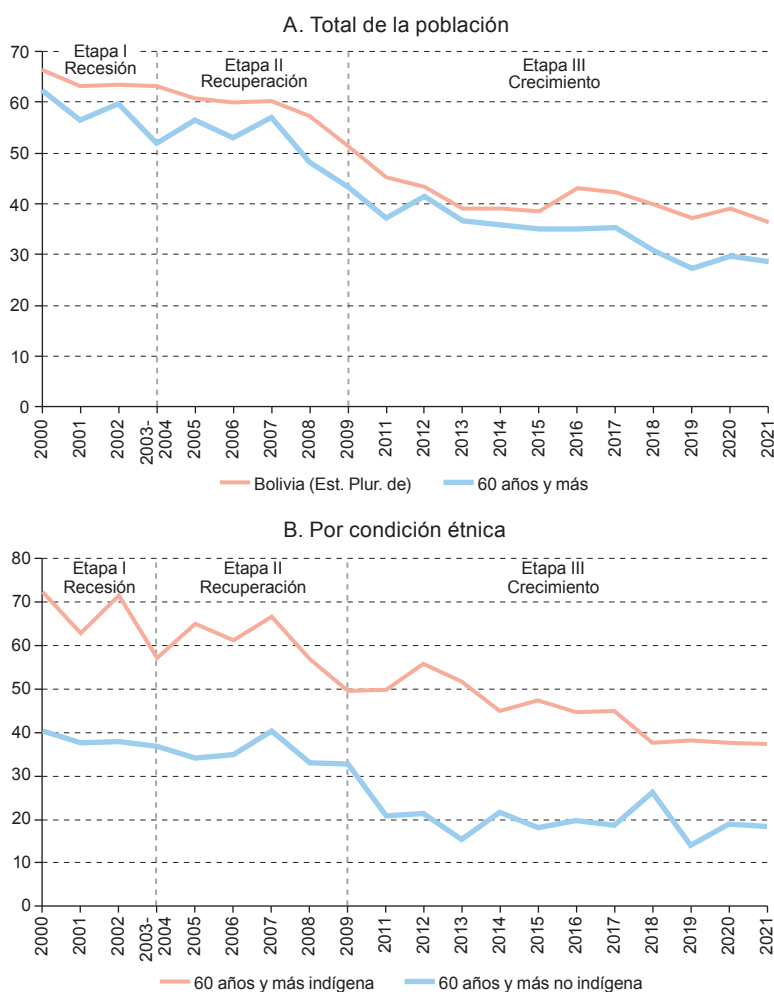
Nota: La serie de datos oficiales del índice de Gini para la población total no presenta información para el año 2003.

Durante la pandemia (2020), la desigualdad aumentó entre las personas mayores no indígenas (0,437), pero se redujo entre las indígenas (0,420), lo que sugiere un impacto diferenciado de la crisis sanitaria. En 2021, esta tendencia se invierte: la desigualdad disminuye entre las personas no indígenas y aumenta entre las indígenas, lo que indica una recuperación más rápida en el primer grupo.

b) Incidencia de pobreza

La incidencia de la pobreza en personas de 60 años y más en el Estado Plurinacional de Bolivia (véase el gráfico 4.A) ha mostrado una tendencia decreciente, del 66,4% en 2000 (etapa I) al 36,4% en 2021 (etapa III), con un leve aumento al 39% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Desde 2014, la pobreza moderada en este grupo fluctuó, y alcanzó un 43% en 2016 para estabilizarse en el 42,2% en 2017, lo que se explica por un ajuste metodológico en la medición. En términos generales, la pobreza en la población de 60 años y más se redujo en 33 puntos porcentuales entre 2000 y 2021, lo que equivale a aproximadamente 448.000 personas que salieron de la pobreza moderada en ese período.

Gráfico 4
Estado Plurinacional de Bolivia: incidencia de pobreza, personas de 60 años y más, total de la población y por condición étnica, 2000-2021
(En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con base en INE Bolivia, Encuestas de Hogares, 2000-2021.

Por condición étnica, la situación de pobreza entre las personas indígenas de 60 años y más disminuyó del 72,4% en 2000 (etapa I) al 37,3% en 2021 (etapa III). Esto significa que se redujo en 35,1 puntos porcentuales y benefició a más de 257.000 personas. En el caso de la población no indígena, la reducción fue del 40,3% al 18,3%, lo que equivale a 22 puntos porcentuales y aproximadamente 132.000 personas. La brecha de pobreza entre indígenas y no indígenas se redujo de 32 puntos porcentuales en 2000 a 19 en 2021, con la menor diferencia registrada en 2018 (11,5 puntos porcentuales). Además, se observó una evolución más errática de la pobreza en la población indígena hasta 2007, posiblemente por la influencia de las políticas aplicadas, como la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) y el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), que favorecieron a los hogares con personas mayores.

2. Pobreza por condición étnica

El cuadro 4 muestra que la situación de pobreza en la población de 60 años y más disminuyó entre 2001 y 2021, especialmente entre quienes acceden a beneficios de seguridad social, a lo largo de las tres etapas económicas especificadas: recesión (hasta 2003), recuperación (2003-2009) y crecimiento (2009-2021).

Durante la etapa de recesión, en 2001, el 65% de las personas que no tenían jubilación estaban en situación de pobreza. Esta cifra se redujo 34,7 puntos porcentuales hacia 2021 (etapa de crecimiento), con una mayor disminución entre la población indígena (33,7 puntos porcentuales) que entre la no indígena (25,4 puntos porcentuales).

En personas con jubilación, la reducción fue menor: del 14,8% en 2001 al 5,7% en 2021, con una mejora notable entre las personas no indígenas (del 15,8% al 3,6%). La afiliación a servicios de salud también mostró efectos positivos. La situación de pobreza entre afiliados a seguros privados bajó 65,3 puntos porcentuales (del 75,3% al 10%) entre las etapas I y III, aunque esta categoría representa una proporción muy reducida de la muestra, especialmente en la población indígena. Entre las personas afiliadas al seguro público, la pobreza se redujo en 28,8 puntos porcentuales, con descensos similares entre las personas indígenas (25,9 puntos porcentuales) y las no indígenas (24,6 puntos porcentuales).

La Renta Dignidad, como transferencia no contributiva implementada en la etapa de recuperación, también aportó significativamente a la reducción de la pobreza: 28 puntos porcentuales en el total. En la población indígena, la incidencia pasó del 62,8% al 38,1% (-24,8 puntos porcentuales) y en la no indígena, del 40,8% al 19,6% (-21,2 puntos porcentuales), lo que muestra un mayor impacto relativo en el primer grupo.

Cuadro 4
Estado Plurinacional de Bolivia: situación de pobreza por variables sociales, total y según condición étnica, 2001-2021
(En porcentajes)

Variable	Total					No indígena					Indígena				
	2001	2006	2011	2016	2021	2001	2006	2011	2016	2021	2001	2006	2011	2016	2021
Posee jubilación															
No	65,5	57,7	41,9	34,6	30,8	48,1	44,9	28,4	22,1	22,7	71,9	64,0	51,3	42,5	38,2
Sí	14,8	9,9	7,8	6,3	5,7	15,8	5,8	5,6	3,5	3,6	14,1	14,5	13,0	10,5	9,9
Afiliación salud															
Ninguna	58,3	67,1	48,8	39,5	28,5	41,7	52,7	29,0	25,9	22,9	64,8	72,4	57,7	44,8	35,5
Pública	57,2	28,4	33,2	29,7	28,4	43,4	24,8	22,7	19,6	18,7	63,5	31,5	45,3	39,3	37,6
Privada ^a	75,3	7,7	3,6	11,9	10,0	50,0	6,3	4,6	6,1	11,1	79,1	10,0	0,0 ^a	33,3	0,0 ^a
Renta de personas mayores															
No	61,9	48,8	39,7	23,0	16,2	44,3	33,3	21,7	15,7	13,2	69,2	57,4	56,5	33,3	21,4
Sí	57,1	52,7	39,1	34,1	29,1	40,8	39,2	24,4	21,6	19,6	62,8	59,8	50,9	42,3	38,1
Afiliación AFP															
No	61,2	52,9	45,0	38,5	30,1	44,0	38,7	30,4	26,6	20,6	67,7	60,3	54,7	45,4	39,1
Sí	25,0	10,0	7,6	6,7	4,1	21,4	7,7	5,6	5,3	3,5	27,1	12,5	12,8	9,5	5,2
Educación															
Ninguna	72,4	73,5	62,1	55,4	55,8	61,5	66,7	51,7	50,8	48,4	74,8	75,1	65,1	56,5	58,4
Primaria	58,0	52,4	39,6	35,5	32,3	45,6	48,0	30,4	26,8	27,3	64,1	54,8	46,0	40,2	35,4
Secundaria	23,6	20,5	18,6	18,8	18,3	19,4	17,8	15,1	15,4	16,6	27,8	23,8	26,5	23,6	21,5
Superior	8,2	7,8	5,8	6,2	3,8	7,7	4,8	4,9	4,6	3,4	8,7	13,3	10,5	10,7	5,2
Sexo															
Hombre	58,7	49,6	37,4	31,3	27,3	43,0	39,0	23,5	18,1	18,8	65,1	55,8	48,5	40,5	35,6
Mujer	60,4	52,7	40,7	34,8	29,2	42,4	34,7	24,7	23,4	19,4	67,0	61,8	53,9	42,9	39,0
Área de residencia															
Rural	70,0	70,9	61,2	52,6	46,6	51,0	61,2	45,8	37,8	41,4	74,9	73,0	65,9	57,1	48,3
Urbana	45,9	36,6	24,6	23,7	19,8	36,6	30,1	18,3	17,2	14,9	51,4	42,5	33,5	30,4	27,5
Tipo de hogar															
Unipersonal	53,7	47,1	40,3	38,9	26,5	39,3	20,0	15,9	24,7	18,7	58,5	56,8	52,6	47,5	33,0
Pareja nuclear	58,3	55,6	39,6	35,8	29,1	35,9	42,0	23,3	15,6	17,0	63,0	59,9	50,6	46,2	38,4
Monoparental	54,1	30,1	24,6	17,6	18,6	33,3	23,5	10,3	14,0	13,0	60,7	33,9	39,4	20,3	26,2

Variable	Total					No indígena					Indígena				
	2001	2006	2011	2016	2021	2001	2006	2011	2016	2021	2001	2006	2011	2016	2021
Nuclear completo	63,3	49,8	37,0	25,7	23,9	45,3	34,3	24,2	14,8	17,2	70,0	61,7	46,1	33,8	31,8
Extendido	63,7	57,5	42,1	36,2	33,5	46,1	47,1	31,0	27,2	24,5	72,3	64,4	53,9	44,2	43,7
Compuesto	52,9	43,8	40,1	31,7	34,1	42,2	26,7	21,9	24,0	22,3	60,2	56,7	61,2	39,3	50,0
Tamaño del hogar															
1	53,7	47,1	40,3	38,9	26,5	39,3	20,0	15,9	24,7	18,7	58,5	56,8	52,6	47,5	33,0
2	57,9	51,0	38,1	33,4	27,7	36,3	36,9	20,7	16,5	16,0	63,6	56,1	50,4	43,1	37,6
3	51,2	49,8	38,9	32,4	24,5	29,1	29,0	25,3	23,6	15,6	60,6	61,7	51,6	38,8	35,2
4	60,7	45,7	37,1	24,6	30,8	44,8	29,5	21,7	17,7	23,7	67,1	55,3	50,5	32,3	40,2
5	65,2	46,7	33,2	26,9	27,2	47,9	46,8	26,6	15,7	19,9	72,9	46,6	40,7	36,5	35,3
6 y más	70,6	62,4	46,5	39,3	43,3	56,8	49,0	34,8	31,9	35,7	78,5	73,6	59,4	45,3	51,6
Jubilación respecto salario mínimo nacional (SMN)															
Ninguno	65,2	59,7	45,3	38,4	33,6	47,7	47,0	30,6	26,0	24,2	71,4	65,6	55,1	46,1	41,6
Hasta 1 SMN	37,5	25,0	22,0	16,9	13,2	33,3	0,0	17,4	13,7	10,5	40,0	50,0	27,8	19,5	16,2
Más de 1 SMN	14,8	9,8	5,0	0,9	1,2	15,3	6,4	3,8	0,7	1,2	14,4	13,3	8,2	1,3	1,2
Situación laboral^b															
Formal	64,6	27,9	40,9	32,6	1,9	42,9	29,6	20,9	13,4	1,9	71,3	25,0	54,9	46,9	1,8
Informal	51,0	52,5	38,7	33,2	29,6	42,5	37,7	24,8	22,3	20,4	55,6	59,9	50,4	40,8	38,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia, Encuestas de Hogares, 2001-2021.

Nota: Personas de 60 años y más en situación de pobreza: n2001 = 1 703; n2006 = 1 272; n2011 = 3 026; n2016 = 3 922 y n2021 = 4 658.

^a Los resultados relacionados con la población indígena afiliada a seguros de salud privados deben interpretarse con cautela. Este grupo representa menos del 1% de la población mayor y tiene escasa representación en la muestra, lo que limita la confiabilidad estadística de los estimados de pobreza para esta categoría en ciertos años (por ejemplo, 2011 y 2021).

^b La construcción de esta variable tomó en cuenta las recomendaciones de la OIT (2003).

El cuadro 5 presenta los resultados de la razón de probabilidades de regresión logística, diferenciada por condición étnica y basada en datos de 20 encuestas. Se analizan los efectos de la jubilación, la afiliación a seguros de salud y los programas de transferencias monetarias, junto con variables de control estadísticamente significativas, sobre la situación de pobreza. Los hallazgos confirman que en 2000 la jubilación tenía un impacto notable en la reducción de la pobreza, especialmente para las personas indígenas, quienes sin jubilación tenían una probabilidad 5,57 veces mayor de ser pobres, frente a 3,65 veces en el caso de las personas no indígenas. No obstante, en 2021, la jubilación dejó de ser un factor estadísticamente significativo en la pobreza de ambos grupos, lo que sugiere que otros elementos del sistema de seguridad social podrían haber compensado su efecto.

El acceso a seguros de salud también demostró ser fundamental para reducir la pobreza. Este avance se sustenta en iniciativas como el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) (2002), el Seguro de Salud Para el Adulto Mayor (SSPAM) y, más recientemente, el Sistema Único de Salud (SUS) en 2019, que facilitaron la ampliación de la cobertura de salud entre las personas mayores. En 2000, las personas no indígenas sin seguro de salud tenían 1,4 veces más probabilidad de ser pobres que las que tenían seguro público. Para las personas indígenas, esta probabilidad era 1,85 veces mayor. En 2021, las personas indígenas registraban un 10% menos de probabilidad $(1 - (\exp(\ln[1,85] + (\ln[0,96] \times 19))) * 100 = 10\%)^9$. Las personas no indígenas sin seguro no mostraron una diferencia significativa en la probabilidad de pobreza, pero las indígenas sin seguro presentaban una reducción del 51% en su probabilidad de ser pobres.

Los programas de transferencias monetarias, como la Renta Dignidad (anteriormente Bonosol), han sido esenciales para reducir la pobreza en la vejez. En 2000, no tener esta renta aumentaba la probabilidad de pobreza en un 24% en el caso de las personas no indígenas y un 31% en el de las indígenas. Para 2021, la probabilidad de pobreza se redujo en un 21% y 3% para las personas no indígenas e indígenas, respectivamente.

La educación mostró ser una herramienta poderosa para reducir la pobreza. En 2000, las personas no indígenas sin educación formal tenían 10,79 veces más probabilidad de ser pobres, en comparación con 12,92 veces las personas indígenas. En 2021, estas probabilidades se redujeron significativamente un 57% y un 60%, respectivamente. De manera similar, tener solo educación primaria en 2000 aumentaba la probabilidad de pobreza 4,95 veces para las personas no indígenas y 6,25 veces para las indígenas. En 2021, estas cifras se redujeron un 44% y un 60%, respectivamente.

En 2000, las mujeres tenían menos probabilidad de ser pobres comparadas con los hombres: el 38% menos en el caso de las mujeres no indígenas y el 47% menos de las indígenas. Para 2021, la reducción fue menor, y las personas no indígenas indicaban un 17% menos de probabilidad, mientras que las indígenas, un 23% menos.

⁹ Los procedimientos de estimación y las expresiones utilizadas para el cálculo de los resultados pueden consultarse en el apartado de metodología.

Cuadro 5

Estado Plurinacional de Bolivia: resultados de la razón de probabilidades de regresión logística de la pobreza, 2000-2021

Variable	No indígena				Indígena			
	Sin ajuste		Ajustado		Sin ajuste		Ajustado	
	Razón	Error estándar	Razón	Error estándar	Razón	Error estándar	Razón	Error estándar
Sin jubilación	7,50***	(1,334)	3,65***	(0,699)	9,94***	(1,409)	5,57***	(0,853)
Sin afiliación a seguro de salud	1,63***	(0,148)	1,40***	(0,134)	2,80***	(0,187)	1,85***	(0,132)
Afiliación salud privada	0,55*	(0,152)	0,66	(0,189)	1,93***	(0,346)	1,52*	(0,297)
Sin renta de personas mayores	1,22*	(0,113)	1,24*	(0,121)	1,15*	(0,079)	1,31***	(0,096)
Sin educación formal			10,79***	(2,265)			12,92***	(3,285)
Primaria concluida			4,95***	(0,955)			6,25***	(1,559)
Secundaria concluida			1,69*	(0,355)			2,96***	(0,797)
Mujer			0,62***	(0,058)			0,53***	(0,040)
Rural			1,04	(0,106)			2,78***	(0,187)
Año	0,96**	(0,013)	0,97	(0,016)	0,97**	(0,011)	1,01	(0,020)
Año x sin jubilación	1,01	(0,014)	1,01	(0,015)	1,01	(0,012)	1,01	(0,012)
Año x sin afiliación seguro salud	0,97***	(0,007)	0,99	(0,007)	0,93***	(0,005)	0,96***	(0,005)
Año x afiliación salud privada	0,98	(0,027)	1,01	(0,028)	0,85***	(0,028)	0,92**	(0,029)
Año x sin renta personas mayores	0,96***	(0,008)	0,98**	(0,009)	0,98***	(0,007)	0,98*	(0,008)
Año x sin educación formal			0,96**	(0,015)			0,95*	(0,018)
Año x primaria concluida			0,97*	(0,014)			0,95*	(0,018)
Año x secundaria concluida			1,01	(0,015)			0,98	(0,019)
Año x mujer			1,02*	(0,007)			1,02**	(0,006)
Año x rural			1,03***	(0,008)			0,98**	(0,005)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia, Encuestas de Hogares, 2000-2021.

Nota: La categoría de referencia para no afiliación es que sí están afiliadas, y para educación, es la educación superior. *p<,05, **p<,01, ***p<,001 (prueba de dos colas).

La disparidad entre las áreas rurales y urbanas también es notable. En 2000, las personas indígenas en áreas rurales tenían 2,78 veces más probabilidad de ser pobres que las de áreas urbanas. En 2021, esta probabilidad disminuyó un 29%. No se encontraron datos suficientes sobre las personas no indígenas en áreas rurales en 2000 y 2021.

El coeficiente del efecto principal del año de la encuesta mostró una disminución en las probabilidades logarítmicas de pobreza a un ritmo anual de 0,030 puntos para las personas no indígenas [$\ln(0.97)$], y un incremento de 0,013 [$\ln(1.01)$] puntos para las indígenas. Para las personas no indígenas sin renta de personas mayores, la reducción fue de 0,053 puntos anuales (es decir, $\ln(0.96) + \ln(0.98) = -0,053$), y para las indígenas sin renta, fue de 0,003 puntos anuales (es decir, $\ln(1.01) + \ln(0.98) = -0,003$). Las personas sin educación formal mostraron una disminución de 0,074 puntos anuales para las personas no indígenas y 0,036 puntos para las indígenas.

Las personas mayores indígenas sin seguro de salud redujeron su pobreza a una tasa anual de 0,025 puntos, mientras que aquellas con seguro privado vieron una reducción de 0,076 puntos. Las personas indígenas en áreas rurales disminuyeron su pobreza a una tasa anual de 0,005 puntos.

D. Discusión y conclusiones

Los resultados del estudio confirman que la seguridad social ha sido clave en la reducción de la pobreza entre las personas mayores en el Estado Plurinacional de Bolivia (2000-2021), especialmente a través de la Renta Dignidad y la ampliación del acceso a seguros de salud, lo que coincide con Arenas de Mesa (2020) y Santos et al. (2023), quienes destacan el papel de las transferencias no contributivas en América Latina y el Caribe.

Si bien se observa una disminución general de la desigualdad de ingresos, según el índice de Gini y las curvas de Lorenz, persisten brechas importantes entre la población indígena y no indígena. La mayor informalidad laboral, menor cobertura previsional y menor nivel educativo explican la menor estabilidad de ingresos en la vejez entre las personas indígenas, a pesar de los avances.

La jubilación y el acceso a seguros de salud tienen efectos diferenciados según la condición étnica. Aunque la jubilación reduce significativamente la pobreza entre indígenas, este efecto debe interpretarse con cautela por el bajo número de personas indígenas con pensiones contributivas, lo que limita la potencia estadística. Esta situación refleja barreras estructurales para el acceso a derechos previsionales, como señalan Belmont (2021) y (Oliveri, 2016). Por ello, se requieren políticas más inclusivas y culturalmente pertinentes.

Aunque el estudio no realiza un análisis de cohortes en sentido estricto, la comparación de encuestas transversales entre 2000 y 2021 permite aproximarse a los efectos acumulativos del contexto económico. La crisis de los años noventa profundizó la vulnerabilidad, mientras que el auge del gas natural y la expansión del gasto social mejoraron el acceso a la seguridad

social (Cachaga Herrera, 2019; Gómez et al., 2015; Muriel y Jemio, 2010). Esto coincide con Ocampo y Gómez-Arteaga (2016), aunque Barrientos y Hulme (2008) advierten que el crecimiento económico no garantiza por sí solo una distribución equitativa.

El estudio confirma que el acceso a la seguridad social sigue siendo desigual, especialmente para la población rural e indígena. Mientras los trabajadores formales acceden a pensiones y atención médica, los informales dependen de programas no contributivos que no siempre garantizan una vejez digna. Esto coincide con AISS (2021) y Gill et al. (2005), quienes señalan que los sistemas de protección social en América Latina son fragmentados y de cobertura limitada. En contraste, Engelhardt y Gruber (2004) encontraron que en los Estados Unidos la seguridad social había reducido significativamente la pobreza en la vejez gracias a un sistema más consolidado. Así, la falta de un programa contributivo sólido sigue siendo una barrera para disminuir la desigualdad en el Estado Plurinacional de Bolivia y la región.

Desde la perspectiva del Estado de bienestar, el Estado Plurinacional de Bolivia ha seguido un modelo híbrido de tipo residual acorde a Esping-Andersen (1990), apoyado en recursos naturales, lo que genera vulnerabilidad fiscal (Aranco et al., 2022). Para avanzar hacia mayor equidad, se requiere diversificar las fuentes de financiamiento, promover la formalización y articular políticas en materia de pensiones, salud y cuidados con enfoque de equidad. Reconocer la situación de las personas mayores indígenas es clave para lograr un sistema verdaderamente inclusivo y sostenible.

Finalmente, en este contexto, es fundamental que las políticas públicas reconozcan la desigualdad estructural que enfrentan las personas mayores indígenas y promuevan respuestas diferenciadas. Aunque el proceso de envejecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia es más lento que el de otros países, este avanza de forma sostenida y plantea desafíos fiscales y de cobertura. Por ello, resulta clave anticipar reformas que integren pensiones, salud y cuidados, con enfoque de equidad y sostenibilidad.

Bibliografía

- Álvarez, F., Brassiolo, P., Toledo, M., Allub, L., Alves, G., De la Mata, D., Estrada, R. y Daude, C. (2020). *Los sistemas de pensiones y salud en América Latina. Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad*. A. Gerez, Ed. Banco de Desarrollo de América Latina. <https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1652/Los%20sistemas%20de%20pensiones%20y%20salud%20en%20América%20Latina.pdf>
- Aranco, N., Bosch, M., Stampini, M., Azuara, O., Goyeneche, L., Ibarrarán, P., Oliveira, D., Retana, M. R. y Torres Ramirez, E. (2022). *Envejecer en América Latina y el Caribe: protección social y calidad de vida de las personas mayores*. <https://doi.org/10.18235/0004287>
- Arenas de Mesa, A. (2020). Los sistemas de pensiones en América Latina. Institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera en tiempos del COVID-19. *Serie Macroeconomía del Desarrollo* (212) (LC/TS.2020/99). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Asamblea Legislativa Plurinacional. (2013). *Ley general de las personas adultas mayores - 369*.

- Asociación Internacional de la Seguridad Social. (2021). *Extender y mantener la cobertura de seguridad social* (1ª ed.). <https://www.issa.int/sites/default/files/documents/2021-11/3-Americas-Chapter2%20Coverage%20%281%29.pdf>
- Astorquiza Bustos, B. A. y Armando Chingal, Ó. (2019). ¿Cómo están nuestros ancianos? Una exploración empírica de la calidad de vida de las personas mayores en Colombia. *Revista CEPAL* (129) (LC/PUB.2019/14-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Banco de Desarrollo de América Latina. (2020). *Hacia sistemas de pensiones más inclusivos para América Latina*. Visiones. <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/11/hacia-sistemas-de-pensiones-mas-inclusivos-para-america-latina/>
- Banco de Desarrollo de América Latina. (2022). *5 datos sobre pobreza en América Latina y el Caribe*. Noticias. <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2022/04/5-datos-sobre-pobreza-en-america-latina-y-el-caribe/>
- Bárcena, A. (2011, julio). América Latina envejece. *América Economía*, 10–11. <https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/america-latina-envejece>
- Barrientos, A. y Hulme, D. (2008). *Social protection for the poor and poorest. Concepts, policies and politics*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-0-230-58309-2>
- Belmont, J. (2021, junio 21). Cómo envejecer bien en Latinoamérica. *Noticias Banco Mundial*, 21–23. <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/07/21/c-mo-envejecer-bien-en-latinoam-rica>
- Berra, J. (2000). *La structure des systèmes de sécurité sociale: étude de droit comparé 24*. Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances.
- Bertranou, F. M. y Maurizio, R. (2011). The role of labour market and social protection in reducing inequality and eradicating poverty in Latin America. *SSRN Electronic Journal*, 1–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1857705>
- Bonadona Cossío, A. (2003). Género y sistemas de pensiones en Bolivia. *Serie Mujer y Desarrollo* (44) (LC/L.1841-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Burgard, S. (2002). Does race matter? Children's height in Brazil and South Africa. *Demography*, 39(4), 763. <https://doi.org/10.2307/3180830>
- Cachaga Herrera, P. (2019). Inversión extranjera directa e implicancias macroeconómicas: evidencia empírica para Bolivia. *Revista de Análisis*, 31(2), 15–64. https://www.bcb.gob.bo/?q=pub_revista-analisis
- Candia Calderón, G. A. (2018). *¿Bolivia cambia? Un análisis del “trabajo digno” y de las trayectorias laborales de la juventud boliviana, en el periodo 2007–2015* [Tesis de maestría, FLACSO México]. <https://flacso.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1026/194>
- Cetrángolo, O. (Ed.). (2009). La seguridad social en América Latina y el Caribe: una propuesta metodológica para su medición y aplicación a los casos de Argentina, Chile y Colombia. *Documentos de Proyectos* (LC/BUE/W.39). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Cheng, S., Tamborini, C. R., Kim, C. y Sakamoto, A. (2019). Educational variations in cohort trends in the Black-White earnings gap among men: Evidence from administrative earnings data. *Demography*, 56(6), 2253–2277. <https://doi.org/10.1007/s13524-019-00827-w>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2007). *Panorama Social de América Latina, 2006* (LC/G.2326-P).
- Crystal, S., Shea, D. y Krishnaswami, S. (1992). Educational attainment, occupational history, and stratification: Determinants of later-life economic outcomes. *Journal of Gerontology*, 47(5), S213–S221. <https://doi.org/10.1093/geronj/47.5.S213>
- Dahuabe, A. (2023). Memoria del Segundo Seminario Regional de Desarrollo Social. Seguridad social (pensiones y salud) y la crisis prolongada: una oportunidad para combatir la desigualdad en el marco de un Estado de bienestar en América Latina y el Caribe. *Serie Seminarios y Conferencias* (101) (LC/TS.2023/32). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

- De Ferranti, D., Leipziger, D. y Srinivas, P. S. (2002, septiembre). La reforma de las pensiones en América Latina. *Finanzas y Desarrollo*, 39–43. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2002/09/pdf/ferranti.pdf>
- Del Popolo, F. y Schkolnik, S. (2013). Pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y vivienda de América Latina: avances y desafíos en el derecho a la información. *Notas de Población* (97), 205–248. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Dethier, J., Pestieau, P. y Ali, R. (2010). Universal minimum old age pensions. Impact on poverty and fiscal cost in 18 Latin American countries. *Policy Research Working Paper*, 5292. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5292>
- Díaz Espaillat, M. (2022). Barreras en el acceso a la pensión de los cañeros haitianos en República Dominicana. *Trabajo y Justicia Social*, 1–16. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/19209.pdf>
- División Observatorio Social. (2020). *Documento de resultados: Personas mayores, envejecimiento y cuidados*. Ministerio de Desarrollo Social de Chile. https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/grupos-poblacion/Documento_de_resultados_Personas_mayores_envejecimiento_y_cuidados_31.07.2020.pdf
- Enciclopedia Británica. (2023). Welfare state. *Encyclopaedia Britannica*. <https://www.britannica.com/money/topic/welfare-state>
- Engelhardt, G. V. y Gruber, J. (2004). Social security and the evolution of elderly poverty. En *Public Policy and the Distribution of Income* (NBER Working Paper 10466). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w10466>
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism* (1ª ed.). Polity. https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=the-three-worlds-of-welfare-capitalism-9780745607962
- Esping-Andersen, G. y Myles, J. (2009). Economic inequality and the welfare state. En W. Salverda, B. Nolan y T. M. Smeeding (Eds.), *The Oxford Handbook of Economic Inequality* (1ª ed., pp. 639–664). Oxford University Press.
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). *Constitución Política del Estado*. Asamblea Constituyente.
- Esteve, A. y Zueras, P. (2021). La estructura de los hogares de las personas mayores en América Latina y el Caribe. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 45, 1–9. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.115>
- Feres, J. C. y Mancero, X. (2001). Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. En *Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos* (4) (LC/L.1479-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Foster, J., Greer, J. y Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3), 761. <https://doi.org/10.2307/1913475>
- Fundación Aru y Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2024). *Envejecimiento en Bolivia: situación, tendencias y desafíos para la protección y cuidado de personas mayores*. https://www.aru.org.bo/wp-content/uploads/2024/12/Envejecimiento-en-Bolivia_Situacion-Tendencias-y-Desafios-para-la-proteccion-y-cuidado-de-personas-mayores.pdf
- Gill, I., Packard, T. y Yermo, J. (2005). *El futuro de la seguridad social en América Latina*. Serie Desarrollo para Todos (12). Banco Mundial. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/171421468758754934/pdf/348660958682561eguridad11201PUBLIC1.pdf>
- Goesling, B. (2007). The rising significance of education for health? *Social Forces*, 85(4), 1621–1644. <https://doi.org/10.1353/sof.2007.0068>
- Gómez, T. A., López, L. F. C. y Patiño, M. P. (2015). Bolivia: Las paradojas de la política de regulación laboral del gobierno del MAS. *Cuadernos del Cendes*, 32(89), 17–46. http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1012-25082015000200003&script=sci_arttext&lng=pt

- Instituto Nacional de Estadística. (2019). *Estudio post-censal del adulto mayor. Estado de situación de los adultos mayores en Bolivia*. <https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/estudio-post-censal-del-adulto-mayor/>
- Instituto Nacional de Estadística. (2020). *Cálculo de líneas de pobreza: documento metodológico*. <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/informacion-tecnica-pobreza/>
- Kenton, W. (2022). Understanding the welfare state and its history. *Investopedia*. <https://www.investopedia.com/terms/w/welfare-state.asp>
- Killewald, A. (2013). Return to being Black, living in the red: A race gap in wealth that goes beyond social origins. *Demography*, 50(4), 1177–1195. <https://doi.org/10.1007/s13524-012-0190-0>
- Marteleto, L. J. (2012). Educational inequality by race in Brazil, 1982–2007: Structural changes and shifts in racial classification. *Demography*, 49(1), 337–358. <https://doi.org/10.1007/s13524-011-0084-6>
- Martínez, D., e Infante, R. (2019). La informalidad en la visión de la OIT: evolución y perspectivas para América Latina. *Noticias*. <https://www.ilo.org/es/resource/article/la-informalidad-en-la-vision-de-la-oit-evolucion-y-perspectivas-para>
- McDaniel, A., DiPrete, T. A., Buchmann, C., y Shwed, U. (2011). The Black gender gap in educational attainment: Historical trends and racial comparisons. *Demography*, 48(3), 889–914. <https://doi.org/10.1007/s13524-011-0037-0>
- Mesa-Lago, C. (1991). Social security in Latin America and the Caribbean: A comparative assessment. En E. Ahmad, J. Drèze, J. Hills y A. Sen (Eds.), *Social security in developing countries* (1st ed., pp. 356–394). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198233008.003.0008>
- Meyer, B., y Wu, D. (2018). The poverty reduction of social security and means-tested transfers. *NBER Working Paper Series, w24567*. <https://doi.org/10.3386/w24567>
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2021). Sistema integral de pensiones. *Boletín Económico*, 7(12).
- Ministerio de Educación. (2010). *Ley de la educación No. 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”*. Asamblea Legislativa Plurinacional. https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=3554&Itemid=470
- Minoldo, S., y Peláez, E. (2023). La seguridad social en América Latina desde un enfoque de derechos: evolución conceptual en el marco de acuerdos internacionales. *Notas de Población*, 49(115) (LC/PUB.2022/22-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Molina B., R., Albó, X., y Figueroa, M. (2006). El índice combinado de condición étnica-lingüística (CEL) y su aplicación al Censo 2001 de Bolivia. En *Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: Información sociodemográfica para políticas y programas* (pp. 455–470). <https://doi.org/10.1080/02697459208722860>
- Muñoz De Bustillo, R. (2021). *Mitos y realidades del estado de bienestar*, 174. Alianza Editorial.
- Muriel, B., y Jemio, L. C. (2010). Mercado laboral y reformas en Bolivia. En J. Rodríguez y A. Berry (Eds.), *Desafíos laborales en América Latina después de dos décadas de reformas estructurales: Bolivia, Paraguay, Perú (1997–2008)* 1, pp. 273–356. Instituto de Estudios Peruanos. <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/46607>
- Murro, E. (2004). *Seguridad social en América Latina y Cono Sur: mitos, desafíos, estrategias y propuestas desde una visión sindical* (1st ed.). Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/04500.pdf>
- Noy, S. (2011). New contexts, different patterns? A comparative analysis of social spending and government health expenditure in Latin America and the OECD. *International Journal of Comparative Sociology*, 52(3), 215–244. <https://doi.org/10.1177/0020715211408760>
- Ocampo, J. A., y Gómez-Arteaga, N. (2016). Social protection systems in Latin America: An assessment. *ESS – Extension of Social Security, Working Paper 52*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_538047.pdf

- Oliveri, M. L. (2016). Pensiones sociales y pobreza en América Latina. *Apuntes: Revista de Ciencias Sociales*, 43(78), 121–158. https://doi.org/10.21678/0252-1865-00430078_5
- Organización Internacional del Trabajo. (1989). *Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Organización Internacional del Trabajo. (2001). *Hechos concretos sobre la seguridad social*, 2. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2003). *Medición de la economía informal*. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_229450.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2014). *La Estrategia de Desarrollo de los Sistemas de Seguridad Social de la OIT. El Papel de los Pisos de Protección Social en América Latina y el Caribe*. H. Schwarzer, P. Casalí y F. Bertranou (Coords.).
- Organización Internacional del Trabajo. (2018). Artículo 22: Derecho a la seguridad social. *Noticias ONU*. <https://news.un.org/es/story/2018/12/1447441>
- Organización Internacional del Trabajo. (2021). Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: avances y retrocesos ante la pandemia. *Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2021*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_823638.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2022). Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: tendencias de la seguridad social con foco en los sistemas de pensiones y la seguridad económica de las personas mayores. *Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2022*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_864517.pdf
- Pinto Saravia, V. y Salinas-Castro, V. (2023). Pre y pandemia por COVID-19: Comportamiento de la pobreza y desigualdad en la población mayor indígena boliviana. En A. Klein y G. Leeson (Eds.), *Ageing in Latin America and the Caribbean: Critical approaches and practical solutions* (1st ed., pp. 30–66). Oxford Institute of Population Ageing. <https://www.ageing.ox.ac.uk/research/regions/larna/publications>
- Prado, A. y Sojo, A. (2010). *Envejecimiento en América Latina: sistemas de pensiones y protección social integral* (LC/G.2475). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Ramos Menar, B., Ayaviri Nina, D., Quispe Fernández, G. y Escobar Mamani, F. (2017). Las políticas sociales en la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar social en Bolivia. *Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research*, 19(2), 155–168. <https://doi.org/10.18271/ria.2017.275>
- Rofman, R. (2020). Social security in Latin America. En D. Gu y M. Dupre (Eds.), *Encyclopedia of gerontology and population aging*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_532-1
- Roldán Ramírez, E. L., Ceballos Zuluaga, D. y Sánchez Galvis, Y. A. (2023). Adulto mayor: la familia como red social en la reducción de la pobreza en Colombia. *Hallazgos*, 20, 11–29. <https://doi.org/10.15332/2422409X.8098>
- Salgado-de Snyder, V. N. y Wong, R. (2007). Género y pobreza: determinantes de la salud en la vejez. *Salud Pública de México*, 49(Supl. 4), 515–521. <https://doi.org/10.1590/S0036-36342007001000011>
- Sánchez Galvis, Y. A. y Ceballos Zuluaga, D. (2021). *La familia como red social en la reducción de la pobreza del adulto mayor* [Tesis de maestría, Universidad de La Sabana]. <http://hdl.handle.net/10818/50223>
- Sanchez-Castañeda, A. (2012). Principales modelos de seguridad social y protección social. En *La seguridad y la protección social en México: su necesaria reorganización*. Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 5–23. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3120/4.pdf>
- Santos, R., Farías, G. C. y Robles, C. (2023). La protección social de los ingresos en América Latina y el Caribe: debates sobre opciones de política. *Documentos de Proyectos* (LC/TS.2023/27/Rev.1). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

- Schkolnik, S. y Del Popolo, F. (2005). Los censos y los pueblos indígenas en América latina: una metodología regional. *Notas de Población* (79) (LC/G.2284-P), 101–132. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Schoeni, R. F., Martin, L. G., Andreski, P. M. y Freedman, V. A. (2005). Persistent and growing socioeconomic disparities in disability among the elderly: 1982–2002. *American Journal of Public Health*, 95(11), 2065–2070. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.048744>
- Spicker, P. (2009). Definición de pobreza: doce grupos de significados. En P. Spicker, S. Álvarez y D. Gordon (Eds.), *Pobreza: Un glosario internacional*, 1. pp. 291–306. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/06spicker.pdf>
- Sullivan, L. y Meschede, T. (2016). Race, gender, and senior economic well-being: how financial vulnerability over the life course shapes retirement for older women of color. *Public Policy & Aging Report*, 26(2), 58–62. <https://doi.org/10.1093/ppar/prw001>
- Taş, E. O., Reimão, M. E. y Orlando, M. B. (2014). Gender, ethnicity, and cumulative disadvantage in education outcomes. *World Development*, 64, 538–553. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.06.036>